

La consulta solicita conocer la postura de la Agencia Española de Protección de Datos, respecto de las sanciones publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia, a las que acceden los buscadores, cuando las personas afectadas, solicitan que dicha información no sea accesible por Internet.

Según parece desprenderse del contenido de la consulta los afectados solicitan ante la Diputación Provincial que sus datos no sean accesibles a los buscadores.

En primer lugar es preciso indicar que la notificación que se efectuó a los ciudadanos a través del Boletín Oficial de la Provincia, fue como consecuencia de la imposible notificación directa al infractor.

La notificación a través de los Boletines, está regulada en la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, donde en su Artículo 59 señala que “1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
(....)

5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.
(....)”

Por su parte el artículo 61 del mismo texto legal señala que “Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario Oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.”

En consecuencia, la notificación a través del Boletín está amparada en la Ley 30/1992, por lo que nos encontramos ante un tratamiento de datos conforme al artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

En cuanto a la posibilidad de solicitar la cancelación de sus datos, el artículo 31.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, define el derecho de cancelación, al señalar que “el ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo conforme a este Reglamento”. En consecuencia, es preciso analizar si el tratamiento efectuado en el supuesto analizado resulta inadecuado o excesivo, para que procediera atender a la solicitud formulada.

La notificación en el Boletín Oficial, en los términos de los artículos 59 y 61 citados, no resulta en ningún caso, ni inadecuada ni excesiva, por lo que en ningún caso se podrá cancelar dicha información.

Dicho esto, el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “no será preciso el consentimiento (...) cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”. De este modo, el tratamiento llevado a cabo podría considerarse conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, no siendo el mismo inadecuado o excesivo, por lo que no procedería atender a la solicitud de ejercicio del derecho de cancelación.

La regulación del derecho de oposición aparece en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 15/1999 donde se reconoce al afectado el ejercicio del derecho de oposición, estableciendo que “en los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”.

En supuestos como el planteado el acceso a la información personal se produce por la concurrencia de dos hechos: la publicación de la notificación en la edición electrónica del Diario Oficial y su indexación por el servicio de búsqueda en Internet.

Por ello, los afectados podrán ejercitar el mencionado derecho ante los buscadores, en cuyo caso concurren todos los requisitos necesarios para que atiendan tal petición.

En cuanto al Diario Oficial, adjuntamos el contenido de una Resolución de Tutela **TD/01589/2008** resuelta por la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se analizaba un supuesto idéntico, señalando en sus últimos fundamentos jurídicos que;

“No existe, por tanto, una disposición legal en contrario respecto del ejercicio del derecho de oposición frente a Google.

Finalmente el artículo 6.4 exige para que proceda el derecho de oposición que concurran motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En este supuesto la información se refiere a los datos personales publicados en los Boletines Provinciales de Córdoba y de Cádiz. La información hace referencia a datos que afectan a su situación personal de manera fundada y legítima.

Desde Google deberían haberse implementado las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso posterior a los mismos.

De acuerdo con lo anterior, procedía la exclusión de los datos personales del reclamante de los índices elaborados por Google, por lo que se estima el presente procedimiento de tutela de derechos.

UNDÉCIMO: Respecto a la información publicada en el Boletín Provincial de Córdoba y en el Boletín Provincial de Cádiz, cabe destacar que el artículo 6.4 de la LOPD parte de la premisa de que no resulta necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos de carácter personal. Así sucede en el presente caso en el que la inserción de las notificaciones por las solicitudes de ayuda social y de sanciones de tráfico se efectúa en cumplimiento de lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, posibilitando su conocimiento por el interesado cuando no es posible la práctica de la notificación personal.

A continuación el artículo 6.4 condiciona el ejercicio del derecho de oposición a la circunstancia de que una ley no disponga lo contrario.

Como se acaba de señalar la Ley prevé la inserción de la notificación en el Diario Oficial en los términos ya expuestos, por lo que procede desestimar el presente procedimiento de tutela de derechos en lo que respecto a las dos Diputaciones Provinciales denunciadas.

No obstante, el artículo 6.4 exige, para que proceda el derecho de oposición que concurren motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En este supuesto la información que se produjo hace tiempo, pone de manifiesto situaciones personales cuyo conocimiento a través de buscadores de Internet, según el interesado, lesionan su derecho a la dignidad y al honor. Máxime teniendo en cuenta, que la publicación oficial se circunscribe a un ámbito territorial determinado al tratarse del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y de Cádiz, mientras que el tratamiento por Google facilita el acceso generalizado y universal a dicha información.

Al margen del requerimiento dirigido por esta Agencia al buscador Google, sería preciso que, dado que el interesado ya se ha dado por notificado de los mencionados actos administrativos, objetivo que se pretendía con su publicación en los citados diarios oficiales, por parte de la Diputación Provincial de Córdoba y la Diputación Provincial de Cádiz, se dictaran las órdenes oportunas para limitar la indexación del nombre y apellidos de Donen los mencionados documentos mediante la incorporación de un código norobot.txt, con objeto de que en el futuro los motores de búsqueda de Internet no puedan asociarlo al interesado.

DUODÉCIMO: Finalmente, respecto a la reclamación interpuesta contra Jurisweb Interactiva, el mismo reclamante en sus alegaciones formuladas

durante la tramitación del presente procedimiento retira su reclamación por haber sido atendido el derecho solicitado, dando por terminado el procedimiento iniciado.

En consecuencia y teniendo en cuenta el principio antiformalista que respecto del desistimiento contempla el artículo 91.1 de la LRJPAC, que no existen terceros afectados y que el reclamante ha desistido de su solicitud, procede aceptarlo en los términos del artículo 91.2 de la norma citada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: ESTIMAR la reclamación formulada y el derecho de oposición ejercido por Don ... contra GOOGLE SPAIN, S.L. instando a esta entidad para que adopte las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilite el acceso futuro a los mismos.

SEGUNDO: DESESTIMAR la reclamación formulada contra la Diputación Provincial de...”.